

Santiago, treinta de abril de dos mil veinticinco.

VISTOS:

En estos autos, el Ministro en Visita Extraordinaria, don Álvaro Mesa Latorre, con fecha catorce de marzo de dos mil veintitrés, dicta sentencia definitiva en la cual, en la parte penal, procede a condenar a José Dolorindo Fernández Cofré, a sufrir la pena de doce años de presidio mayor en su grado medio y accesorias legales, en calidad de autor del delito de homicidio calificado de Marcos Quezada Yáñez, hecho sucedido el 24 de junio de 1989, en la comuna de Curacautín; a César Octavio Adriazola Azocar, a sufrir la pena de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio y accesorias legales, en calidad de autor del mismo delito, y; a José Domingo Cádiz Parada y Bernardo Iván Aedo Leiva, a la purga de la pena de siete años de presidio mayor en su grado medio y accesorias legales, ambos en calidad de cómplices en el ilícito detallado. En todos los casos, se determina su cumplimiento efectivo.

Impugnada dicha decisión, una de las Salas de la Corte de Apelaciones de Temuco, conociendo de los recursos presentados, procedió a desestimar los mismos y con ello confirmó el fallo en alzada.

En contra de esta última sentencia se dedujeron los recursos de casación que se pasan a analizar, respecto de los cuales se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

I. EN CUANTO A LOS RECURSOS DE CASACIÓN EN LA FORMA.

PRIMERO: Que, por parte de las defensas de los sentenciados, se dedujeron sendos recursos de casación en la forma que comparten el motivo de



nulidad formal pero difieren, uno de ellos, en la argumentación y las normas legales que se estiman violentadas, de allí que el análisis de tres de ellos será de forma conjunta y luego se procederá al estudio del cuarto de los arbitrios descritos.

SEGUNDO: Que, conforme a lo expuesto, las asistencias letradas de los inculcados Fernández, Adriazola y Cádiz, presentan un recurso de casación en la forma basado en el motivo de casación contemplado en el numeral 9° del artículo 541 del Código de Procedimiento Penal, en relación con los artículos 54, 502, 535 y numerales 4° y 5° del artículo 500, todos del mismo cuerpo legal.

A propósito del artículo 502 del Código de Procedimiento Penal, señalan que, el mismo, establece una exigencia clara que debe estar contenida en la sentencia, cual es que; *“si la prueba con que se hubiere acreditado la culpabilidad del procesado consiste únicamente en presunciones, la sentencia las expondrá una a una”*; lo cual, en este caso, sostiene que el tribunal no cumplió pues no expone referencia alguna a este aspecto sino que, simplemente, existe una enumeración de los antecedentes reunidos en la causa, en donde, además, se desconoce el razonamiento que ocuparon los sentenciadores para la determinación de cada uno de los hechos atribuidos a los inculcados.

En tal sentido, consideran como una razón suficiente para anular formalmente el fallo recurrido y dictar uno de reemplazo en que se acojan los recursos impetrados, revocando lo resuelto y decretando la absolución de sus defendidos por no encontrarse asentado el hecho típico y la participación de conformidad a ley.

TERCERO: Que, de igual forma, bajo la misma causal de casación, sobre el fallo atacado, plantearon la infracción de los numerales 4° y 5° del artículo 500



del Código de Procedimiento Penal, los cuales establecen dos exigencias que debe contener la decisión definitiva: *4° Las consideraciones en cuya virtud se dan por probados o por no probados los hechos atribuidos a los procesados; o los que éstos alegan en su descargo, ya para negar su participación, ya para eximirse de responsabilidad, ya para atenuar ésta; 5° Las razones legales o doctrinales que sirven para calificar el delito y sus circunstancias, tanto las agravantes como las atenuantes, y para establecer la responsabilidad o la irresponsabilidad civil de los procesados o de terceras personas citadas al juicio.*

Denuncian la omisión de dichos extremos en relación con las alegaciones que fueron planteadas en los recursos de apelación, de lo cual no existió ninguna referencia en la sentencia respectiva, en particular sobre la ausencia del hecho típico y la falta de participación planteada, asegurando que no se cumplieron los requisitos para configurar las presunciones del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, pues sus conclusiones no se basan en premisas que descansen en hechos reales probados, no pudiendo así considerar como una presunción judicial que tenga el valor de plena prueba.

En esta línea y en extenso, reproducen los elementos probatorios que luego, en sus diferentes recursos, analizan y valoran de una manera disímil a la que fija el tribunal, enfatizando los yerros en que se habría incurrido al darle valor inculpativo al momento de fijar la actividad penalmente relevante respecto de los inculcados, lo cual denota el vicio que vienen desarrollando y que, incluso, el informe fiscal evacuado en el tribunal de alzada, refrenda al proponer la revocación del fallo por dichos motivos.

Sobre lo mismo, denuncian omisiones en torno a la determinación jurídica



de los hechos, lo cual también formó parte de las protestas planteadas, al igual que las fundamentaciones respecto de la calificación de lesa humanidad de este, las cuales considera ausentes.

En definitiva, estimaron que el fallo no ha sido extendido en la forma dispuesta por la ley; ello debido a que, al haberse incurrido en las omisiones expuestas, los recurrentes debieron ser absueltos, ya sea porque el hecho no era típico, o por no haberse acreditado su participación, o por haberse obviado que los hechos no se pueden encuadrar en un crimen de lesa humanidad, habiendo operado la extinción de la responsabilidad penal por estar prescrita la acción penal en este caso o, en caso que se estime punible el hecho investigado, este correspondió a un delito de homicidio simple en el cual, atento a la participación atribuida a cada uno, debe existir una rebaja en la penalidad aplicada, con lo cual, piden acoger el recurso, anular la sentencia impugnada, y dictar separadamente una de reemplazo que, revocando el fallo de primer grado, acceda a la petición descrita.

CUARTO: Que, por parte de la defensa del sentenciado Bernardo Iván Aedo Leiva, también se dedujo un recurso de casación en la forma, el cual se apoya en el numeral 9° del artículo 541 del Código de Procedimiento Penal, en relación con el numeral 4° del artículo 170 del Código de Enjuiciamiento Civil.

En particular, el recurrente cuestiona la falta de un análisis relacionado con los argumentos planteados por su parte, al igual que los elementos de prueba que exculparían al sentenciado Aedo Leiva, apuntando que ello es evidente, al punto que el representante del Ministerio Público Judicial da cuenta de ello e insta por la revocación del fallo de primer grado.



En este orden de cosas, refiriéndose a jurisprudencia en el ámbito civil, asegura que esta clase de recursos conforma una herramienta procesal que busca controlar la existencia de consideraciones de hecho y de derecho que sirven de base a una condena, lo cual no se encuentra contenido el fallo en estudio y, en consecuencia, solicita la invalidación del mismo, dictándose uno que cuente con las consideraciones faltantes y, sobre las mismas, razonar y revocar la decisión de primera instancia, absolviendo al sentenciado de la acusación deducida en su contra.

QUINTO: Que, como el primero de los reproches que se analizará, los recurrentes enuncian una infracción del artículo 502 del Código de Procedimiento Penal, asegurando que existe una omisión en la indicación de las presunciones usadas para determinar la culpabilidad de los encausados, tal como lo exige dicho precepto.

En este punto, esta Corte ya ha tenido la oportunidad de referirse a un reparo de esta clase y ha dejado en claro que la obligación de exponer una a una las presunciones, en el caso que señala la norma legal invocada, no constituye un requisito formal del fallo que autorice la causal de casación prevista en el N° 9 del artículo 541 del Código de Procedimiento Penal y, suponiendo que la exigencia indicada no estuviere debidamente cumplida, esta circunstancia no tendría, en la especie, influencia alguna en lo dispositivo (C. Suprema, 1° diciembre 1960. R., T.57, Sec. 4ª, p. 257 / C. Suprema, 19 de octubre 1965. R., T.62, Sec. 4ª, p. 462), con lo cual, este extremo del recurso en estudio puede ser descartado desde ya.

SEXTO: Que, en una segunda sección de sus cuestionamientos de forma, los defensores denuncian una serie de omisiones planteadas a propósito de varios



aspectos ya detallados, los cuales, en el caso de la defensa de Fernández, Adriazola y Cádiz, los vincula con las exigencias señaladas en los numerales 4° y 5° del artículo 500 del Código de Procedimiento Penal, en relación con el N° 9 del artículo 541 del mismo cuerpo legal, en tanto, el segundo de los letrados, quien defiende a Aedo, lo relaciona con la exigencia descrita en el numeral 4° del artículo 170 del Código de Procedimiento Civil.

En todos los casos, como se desprende de sus planteamientos, los recurrentes denuncian una falta de razonamientos que preceda la resolución de aquellos asuntos sometidos a la decisión del tribunal. En concreto, visualizan el yerro en el fallo de primera instancia, el cual hizo suyo el de segundo grado al confirmar el mismo, sin referirse a los tópicos planteados.

No obstante, para resolver lo anterior, siempre en el plano formal, no puede desatenderse las características del recurso de casación, el cual conforma un arbitrio de carácter formal y de derecho estricto, en el que se exige el cumplimiento de los requisitos que la ley procesal fija para ellos. En tal sentido, por remisión del artículo 535 del Código de Procedimiento Penal, en esta materia cobra plena aplicación el artículo 769 del Código de Procedimiento Civil, el cual, en su inciso primero establece que, *para que pueda ser admitido el recurso de casación en la forma es indispensable que el que lo entabla haya reclamado de la falta, ejerciendo oportunamente y en todos sus grados los recursos establecidos por la ley*. En esta norma se devela una de las necesidades que debe cumplir el recurrente de casación, cual es formular su reclamo de forma oportuna y en todos sus grados del vicio que observa, agotando todos los medios que la ley franquea para subsanar el defecto, lo cual no se constata en la especie puesto que al



revisar el proceso, únicamente, se advierten los recursos de apelación de los encartados, más no el recurso de invalidación de forma que se base en capítulos de nulidad como los que ahora propone, de tal forma que se incumple con el requisito enunciado.

Incluso, ya se ha resuelto que, si el reparo hecho al fallo descansa en la causal 9ª del artículo 541 del Código de Procedimiento Penal, en relación con los N° 4° y 5° del artículo 500 del mismo Código – omisión de consideraciones sobre los descargos hechos por el reo –, y dicho vicio se había cometido, inclusive, en la sentencia de primer grado, de la cual sólo se limitó a apelar el encausado, no ha sido suficientemente preparar el recurso de nulidad formal (C. Suprema, 20 septiembre 1982. R., t. 89, sec. 4ª, p. 197).

De lo anterior, resulta evidente que, lo descrito, también abarca el supuesto defecto denunciado por la defensa de Aedo en torno al incumplimiento al numeral 4° del artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, el cual responde a una norma legal que siquiera es aplicable a este procedimiento por cuanto la normativa a la que debió referirse corresponde al artículo 500 del Código Adjetivo, el que no fue mencionado por parte del articulista, de tal forma que los recursos de casación en la forma que vienen siendo analizados deberán ser descartados.

II. EN CUANTO A LOS RECURSOS DE CASACIÓN EN EL FONDO.

SÉPTIMO: Que, en forma conjunta, los mismos recurrentes formulan recursos de casación en el fondo, los cuales, en forma previa a su análisis, requieren de la indicación de los hechos que los sentenciadores de instancia estiman asentados, los que están contenidos en el razonamiento 3° del fallo de primer grado, siendo refrendados en segunda instancia y que son objeto de



juzgamiento:

A.- Que a raíz de una denuncia por robo que afectó al local comercial "Panadería Suiza" en la comuna de Curacautín, el día 24 de junio de 1989, alrededor de las 12:30 horas, fue detenido en la vía pública Marcos Quezada Yáñez, de 17 años de edad, quien era sindicado como el único sospechoso del ilícito, por haber trabajado de manera ocasional en dicho lugar. Su aprehensión fue practicada por cuatro funcionarios de Carabineros de la Comisaría de Curacautín, entre ellos los cabos Joel Pérez Isla y Nelson Almendras Illesca y los carabineros Marcos Aguirre Guajardo y Erwin Hormazábal Aedo. Al momento de la detención, Quezada Yáñez no presentaba lesiones visibles.

B.- Que una vez en la comisaría, Quezada Yáñez fue ingresado a una dependencia destinada al entretenimiento de los funcionarios de la unidad, contigua al cuerpo de guardia. Allí fue interrogado por todos sus aprehensores y el Teniente César Adriazola Azócar, quien, además, dirigía el interrogatorio del detenido. Luego de que supuestamente Quezada Yáñez se atribuyera participación en el ilícito investigado, fue trasladado fuera del recinto policial hasta el sector del estero Manzanoco, a un terreno privado, cercano a un establecimiento educacional, ya que supuestamente habría tirado algunas especies en dicho lugar. Este traslado estuvo a cargo de los cabos Pérez Isla y Almendras Illesca, además del carabinero Aguirre Guajardo. Posteriormente, fue nuevamente conducido hasta el recinto policial, entregándosele al cuerpo de guardia, siendo interrogado nuevamente, tal como se dirá en la siguiente letra.

C.- Que el mismo día 24 de junio, tres funcionarios de la unidad de carabineros de Manzanar, entre ellos el jefe de ese retén, Sargento José



Dolorindo Fernández Cofré, y los carabineros Claudio Contreras Valencia y Erick Vásquez Órdenes, se constituyeron en la Quinta Comisaría de Carabineros de Curacautín, ya que el comisario de dicha unidad les ordenó formar la comisión civil encargada de la fiscalización de alcoholes en la comuna. Durante sus labores, la comisión descrita procedió a la aprehensión de dos personas, entre ellos José Lagos Pulgar y Juan Maldonado Pacheco, quienes fueron conducidos hasta los calabozos de la Quinta Comisaría de Carabineros de Curacautín e ingresados en ellos a las 16:35 y 17:55 horas respectivamente, según da cuenta el propio Libro de Novedades de Guardia ese cuartel. Que Maldonado Pacheco, al cabo de unos minutos luego de haber sido ingresado en esas dependencias, escuchó gritos de dolor de una persona de sexo masculino, oyendo cada vez el ruido característico de paso de electricidad y risas de algunos carabineros, prolongándose esta situación entre dos o tres minutos, aproximadamente. Posteriormente, el detenido escuchó alboroto y paseos de carabineros por frente al calabozo en que se encontraba, observando el ingreso de funcionarios de carabineros con palos o vigas y luego una persona joven sobre un carrito o camilla, trasladado por personal de carabineros, entre ellos el sargento José Dolorindo Fernández Cofré, que esa noche se encontraba integrando la comisión civil de alcoholes en esa localidad.

D.- Que alrededor de las 19:20 horas, del mismo día 24 de junio de 1989, familiares de Quezada Yáñez concurrieron hasta la unidad de Carabineros a fin de consultar por su estado y dejarle alimentos. Sin embargo, el cabo José Cádiz Parada, que en esos momentos estaba de servicio de guardia, les manifestó que regresaran más tarde, no informándoles que en el momento de revisar el calabozo



en que se hallaba Marcos Quezada, el carabinero Bernardo Aedo Leiva lo encontró colgado con una chomba desde una de las vigas.

E.- Que acontecido lo anterior, el cabo Cádiz Parada comunicó la situación de Quezada Yáñez a sus superiores, entre ellos al Teniente César Adriazola Azócar, quienes concurrieron al lugar y observaron que la persona de Quezada Yáñez pendía sin vida desde una de las vigas del calabozo.

F.- Que el cadáver de Quezada Yáñez fue remitido al médico legista Wolfgang Reuter Berger, junto con el parte policial que indicaba que al parecer Quezada Yáñez habría fallecido por ahorcamiento. El profesional determinó que la causa precisa y necesaria de la muerte de Marcos Quezada Yáñez era atribuida a "shock determinado muy probablemente por acción de corriente eléctrica aplicado en algunos dedos de ambas manos". Lo precedente es corroborado, además, por el informe del Departamento de Medicina Criminalística de la Policía de Investigaciones de Chile, a fs. 758, el cual concluye que Quezada, previo a su ahorcamiento, fue expuesto por terceros a electricidad en ambas manos y que probablemente posterior a dicha exposición se encontraba incapacitado para efectuar maniobras conducentes a su ahorcamiento, lo que es coherente con el ingreso de Quezada Yáñez a esa repartición, sin lesiones visibles y la declaración del principal testigo, Juan Maldonado Pacheco y el informe del Servicio Médico Legal de fs. 1.599 y siguientes. Del mismo modo el informe del mismo servicio de fs. 2.596 donde sugiere que puede ser ahorcamiento, pero no desmiente que hubo acción de corriente eléctrica, no pudiendo desvirtuar los dichos del testigo Juan Maldonado Pacheco.-

G.- Que por lo anterior, la persona de Marcos Quezada Yáñez, una vez



detenido y llevado al cuartel policial fue objeto de apremios con uso de electricidad, en este caso en ambas manos, lo que le causó un desmayo o falta de conciencia. En tales circunstancias no hacía posible que Quezada Yáñez, por su estado de salud, por las condiciones en que estaba en el calabozo, ubicación de la viga y utilización de la prenda que sirvió de vínculo, se hubiera ahorcado, tal como se ha dicho en la letra anterior. Muerte que finalmente no permite descartar la participación de terceros, según el propio informe del Servicio Médico Legal de fs. 1.599 y siguientes y el de fs. 2596. De todo esto tomó conocimiento tanto el personal de guardia, interrogador y quienes se encontraban de servicio de guardia el día de los hechos. Además, en ninguna pieza del expediente militar de la época que se tiene a la vista, se deja constancia que al momento del ingreso a la unidad policial, Marcos Quezada Yáñez haya tenido lesiones visibles en alguna parte del cuerpo, lo que es coincidente con el informe de la Sección de Asuntos Internos Provincial Malleco de Carabineros de Chile, que rola a fs. 103 y siguientes.

Finalmente, en relación al principal testigo del proceso, Juan Nolberto Maldonado Pacheco, es el propio informe psiquiátrico del Servicio Médico Legal de Temuco, de fs. 2.046 y siguientes, el que concluye que es una persona normal sin alteración de juicio de realidad, lo que además se ve corroborado por mantener un relato coherente y similar cada vez que ha comparecido en el proceso.”

OCTAVO: Que, lo anterior, conforme a lo resuelto en la sentencia de primera instancia, corresponde al delito de homicidio calificado, estimando concurrente la calificante de la alevosía y considerando que, el mismo, además, conforma un crimen de lesa humanidad, cuyos aspectos se mantuvieron en la



revisión ejecutada por el Tribunal de Alzada.

NOVENO: Que, por parte del apoderado de los sentenciados Fernández, Adriazola y Cádiz, se dedujo un recurso de casación en el fondo, el cual se basó en las causales de los numerales 2° y 7° del artículo 546 del Código del Procedimiento Penal.

Al inicio, el recurrente argumenta sobre la causal del numerando 7°, asegurando que existe una infracción por errónea aplicación de la ley penal sobre las normas reguladoras de la prueba de los artículos 488 N° 1° y 2° del Código de Procedimiento Penal, en relación con los artículos 456 bis, 472 y 473 del Código de Procesal Penal (*sic*), lo que se evidencia en la forma de construir las presunciones judiciales de culpabilidad sobre la participación de los encartados, ello en atención a que, las mismas, no se fundan en hechos reales y probados ni tampoco son múltiples ni graves, pues se basan, principalmente, en el testimonio de Juan Maldonado Pacheco, de quien, los recurrentes, realizan cuestionamientos en torno a la veracidad de sus dichos ya que se trató de una persona que, a la época de los hechos, fue detenida por encontrarse en estado de ebriedad y sólo, más de dos décadas después, modifica su versión acerca de lo sucedido, entregando detalles incriminatorios que se contraponen a la tesis del suicidio, de tal manera que sus dichos no son suficientes para construir la intervención penal atribuida.

A reglón seguido, vinculado con lo anterior, explica la infracción que le atribuye a los artículos 472 y 473, esta vez del Código de Procedimiento Penal, asegurando que no existe en el expediente un dictamen unívoco de un médico legista que concluya, según la *lex artis* tanatológica, que el fallecimiento de la



víctima se debió a una muerte del tipo homicida, tan solo existen dictámenes contradictorios a esa conclusión pero, de manera sesgada, se descartan basado en los dichos del mentado testigo, lo cual conforma una afectación de las leyes reguladoras de la prueba.

Luego, como segunda causal de casación, presentan aquella señalada en el numerando 2° del artículo 546 del Código del Procedimiento Penal, en relación con los artículos 18, 93 N°6, 94, 95 y 391 N°1 del Código Penal y el artículo 1° de la Ley N° 20.357.

En este extremo, acusa la infracción sustancial del artículo 391 N° 1 del Código Penal, al encuadrar los hechos que el sentenciador dio por establecidos, en el tipo penal contenido en dicho precepto, calificando el delito de homicidio por concurrir alevosía, cuestión que no es posible configurar con los hechos acreditados. De igual forma, entiende que se ha aplicado el carácter de lesa humanidad asociado a la Ley N°20.357, en circunstancias que no es aplicable por un tema de temporalidad y, por lo demás, no se cumplen con los aspectos necesarios para ser considerado un delito de esa clase, cuestión que repercute en la aplicación de la prescripción de la acción penal.

En consecuencia, solicitan acoger el recurso por la causal del artículo 546 N° 7 del Código de Procedimiento Penal, anulando la sentencia recurrida, dictando la correspondiente sentencia de reemplazo que revoque la sentencia de primer grado y, en definitiva, se absuelva a los acusados; o, en caso de rechazarse la causal anterior, se acoja la causal que se funda en el artículo 546 N° 2 del Código de Procedimiento Penal, anulando el fallo impugnado de segunda instancia, dictando la correspondiente sentencia de reemplazo que revoque la sentencia de



primer grado y en definitiva se absuelva a todos los inculpados recurrentes.

DÉCIMO: Que, en un mismo sentido, el defensor letrado del sentenciado Aedo recurre de casación en el fondo, fundando su arbitrario, en forma conjunta, en las causales de los numerales 2° y 7° del artículo 546 del Código del Procedimiento Penal.

A propósito del numerando 2° del referido artículo, apunta la infracción del artículo 1, 16, 64 y 391 del Código Penal, al igual que el artículo 7° de la Convención Americana de Derechos Humanos y artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

En esta parte, la recurrente sostiene que no existió delito alguno debido a que no se cumple con los elementos del tipo penal y, sin embargo, yerran los sentenciadores al considerar configurado el ilícito de homicidio calificado, lo cual se constata, además, al revisar el tenor del informe fiscal evacuado, el que detalla los motivos para arribar a esa conclusión. Lo mismo ocurre con la participación delictiva atribuida, en donde cuestiona la falta de precisión de las conductas que, supuestamente, ejecutó el inculpado Aedo, dando cuenta que el raciocinio empleado por el sentenciador tan sólo son palabras vacías que carecen de sustento.

Finalmente, respecto de la segunda de las causales planteadas, esta es, la contemplada en el numeral 7° del artículo 546 del Código Adjetivo, el recurrente denuncia la infracción de los artículos 109, 110, 111, 481, 482, 488 y 456 bis del Código de Procedimiento Penal, lo cual se cometería al ponderar erradamente todos los medios probatorios de cargo usados para acreditar el delito y la participación, atribuyendo, incluso, un carácter confesional a los dichos del



enjuiciado, lo que califica como otro error de derecho al aplicar el artículo 481 del Código de Procedimiento Penal.

En consecuencia, denuncia la violación de las normas reguladoras de la prueba, lo cual se tradujo en la dictación de un fallo condenatorio, por cuanto se le ha imputado una participación culpable en calidad de autor (*sic*) del delito de homicidio calificado, cuando los antecedentes y la sola lógica natural lleva a concluir que no ha cometido tal ilícito.

En conclusión, solicita la invalidación del fallo y dictar la correspondiente sentencia de remplazo, en la cual se resuelva revocar la sentencia recurrida de primera instancia y la condena impuesta, haciendo una correcta calificación del supuesto delito imputado y dar la justa aplicación del artículo 391 N° 1 del Código Penal, concluyendo la atipicidad de la conducta.

UNDÉCIMO: Que, en un primer análisis de forma, no escapa al examen de esta Corte el vicio de que adolecen los recursos previamente anotados.

En efecto, lo cierto es que las recurrentes plantean dos causales cuyos fundamentos son antagónicos entre sí y resultan incompatibles en la forma cómo vienen planteados pues, primero, a través de la causal del numeral 7° del artículo 546 del Código de Enjuiciamiento Penal se cuestiona la observancia de las leyes reguladoras de la prueba en la construcción de los hechos asentados por el Tribunal. En concreto, se denuncia una infracción a la operación judicial respecto de la ley a las pruebas en la construcción de los sucesos procesales, es decir, en la determinación de los hechos, como sería, por ejemplo, otorgarle un sentido diverso al valor probatorio legal de un determinado instrumento de prueba o, aceptar ciertos instrumentos de acreditación cuando la legislación no lo prevé. En



cambio, al proponer un motivo de nulidad como el que establece el numerando segundo, la recurrente acepta los hechos que, previa o conjuntamente cuestiona y, de manera incongruente, controvierte el ejercicio de subsunción judicial, lo cual es un razonamiento contrapuesto e incongruente con el carácter formal y de Derecho estricto.

En un mismo sentido, se constatan otros defectos en los arbitrios de impugnación, en particular en las peticiones planteadas a este tribunal pues, en ellas, existen solicitudes formuladas de manera subsidiaria y/o alternativa, lo cual, como reiteradamente ha sido sostenido por esta Corte, resulta improcedente en un arbitrio de las características ya anotadas, en que no es aceptable la formulación de motivos condicionados a la procedencia de uno u otro ya que ello pone al Tribunal de casación en la tarea de optar por la ley que se denuncia amagada, siendo un aspecto propio de quien recurre por esta vía, lo cual implica que el recurrente debe optar por una sola línea de argumentos jurídicos y mantenerla en el desarrollo que efectúa en el recurso, aspectos que no se advierten en el presente caso.

De igual forma, otra impropiedad que emana de los recursos, es lo que dice relación con las normas legales que se enuncian como desatendidas, las cuales, no todas son propias de las causales de casación que se proponen, lo que acrecienta los defectos que se observan en los mismos. En efecto, al revisar las disposiciones jurídicas expresadas, en particular las que se relacionan con la causal 7ª del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, es posible constatar imprecisiones insalvables. Así, en el caso de los recursos sostenidos en favor de los sentenciados Fernández, Adriazola y Cádiz, primero, sus apoderados citan



normas de un cuerpo legal incorrecto, como lo es el Código Procesal Penal e, incluso, salvando ello como un error de copia, las normas mencionadas como amagadas, los artículos 472 y 473 del Código de Procedimiento Penal, son disposiciones que dicen relación con el valor de los informes periciales y no con la ponderación probatoria de los mismos pues ellas no establecen reglas a las que deba someter el juez su actuar, sino que establecen una facultad, lo cual se constata al revisar su texto ya que, por lado, el artículo 472 del Código de Procedimiento Penal dice que un informe en determinadas circunstancias *“podrá ser considerado”*, en tanto, el artículo 473 de ese mismo cuerpo normativo, afirma que la fuerza probatoria del dictamen pericial *“será estimada... una presunción más o menos fundada, según sean la competencia de los peritos, la uniformidad o disconformidad de sus opiniones, los principios científicos en que se apoyen, la concordancia de su aplicación con las leyes de la sana lógica y las demás pruebas y elementos de convicción que ofrezca el proceso”*, esto es, se entrega a un proceso de ponderación que hace el juez de modo exclusivo en relación a los demás elementos de cargo y a factores propios de la sana crítica, de lo cual se colige otro error en la interposición del recurso.

Por último, el mismo yerro se comete en el recurso planteado en favor de Aedo, en donde se enuncian disposiciones que no son leyes reguladoras de la prueba, v. gr. se menciona el artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, el cual sí contiene disposiciones reguladoras de la prueba, pero sólo en sus números 1 y 2, en tanto en el caso del recurrente, éste ha citado como infringidos los cinco ordinales del mismo, lo cual denota la falta la certeza y precisión propias de un recurso extraordinario.



DUODÉCIMO: Que, en las condiciones anotadas, no cabe sino rechazar los recursos de fondo deducidos en favor de los sentenciados.

DÉCIMO TERCERO: Que, no obstante el rechazo de los arbitrios de casación, durante el estado de acuerdo, se advirtió la existencia de algunos vicios de forma en la sentencia de segunda instancia, la cual confirmó en su totalidad la del tribunal *a quo* y con ello hizo suyos todos los aspectos referidos en aquélla, entre ellos, la evidente falta de razonamientos asociados a la configuración del delito como la participación atribuida a los encartados, lo cual es necesario examinar.

DÉCIMO CUARTO: Que, a fin de explicar lo indicado, necesario resulta mencionar que, la sentencia definitiva conforma el acto jurídico procesal complejo, al cual se le exige una serie de requisitos que no sólo están indicados en los cuerpos legales adjetivos sino que, incluso, ha llevado al Máximo Tribunal a extenderse en el desarrollo que a ella se le requiere pues conforma el acto que, por antonomasia, caracteriza la labor jurisdiccional y responde a una de las tres etapas esenciales de esa función, lo cual se extrae del artículo 1° del Código Orgánico de Tribunales y, por cierto, del inciso 1° del artículo 76 de la Constitución Política de la República, al sostener, casi de manera uniforme: *“La facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley”*.

Dicho de otro modo, la dictación de una sentencia judicial es el resultado del acto de juzgar, labor por excelencia de los magistrados de una República, siendo el momento en que se fijan los hechos, se aplica el derecho y se adopta la decisión sobre la cuestión planteada que, en este caso, lo conforma el ejercicio de



la acción penal y/o civil, siendo relevante, sin duda, la prueba y la ponderación de esta, lo cual se asocia de manera directa con el deber de fundamentación de las sentencias judiciales. Así, a propósito de la prueba, en palabras del connotado autor italiano, Michele Taruffo, se dice que, *el proceso, y en particular la decisión final, tienden a resolver la incertidumbre que se da respecto de la verdad o falsedad de los enunciados que tienen que ver con los hechos relevantes de la causa. El instrumento que desde siglos las partes utilizan para demostrar la veracidad de sus afirmaciones, y del cual el juez se sirve para decidir respecto a la verdad o falsedad de los enunciados fácticos, lo constituye la prueba (Taruffo, Michele. Consideraciones sobre Prueba y Verdad. En Coloma, Medina, Méndez, Núñez, Díaz, Taruffo y Dannecker. 2005. p. 176. La Prueba en el Nuevo Proceso Penal Oral. Ed. LegalPublishing).*

De esta forma, tal como se anticipare, lo indicado se enmarca en un deber propio de las decisiones judiciales, cual es su necesidad de fundamentar las resoluciones, lo que no es otra cosa que la obligación que pesa sobre cualquier Autoridad de explicar, señalar las razones o antecedentes en que se apoya a la hora de decidir, lo cual exponía con suma claridad el profesor Hugo Pereira Anabalón, quien señalaba que, *la primera tarea a que está abocado el juez al sentenciar, es la de reconstruir, mediante representación, los hechos acaecidos en un pasado más o menos remoto y, también, determinar la existencia y la vigencia de las normas positivas susceptibles de ser aplicadas al caso sub-lite, hayan sido o no invocadas por los litigantes (“jura nova curia”) ... En un segundo momento, el juez está en la necesidad de interpretar y de aplicar la norma genérica al caso que le ha sido sometido o, visto desde la perspectiva inversa,*



subsumir el caso en la norma. Se trata de elaborar un silogismo en que la premisa mayor es la norma, la premisa menor el caso y la conclusión la decisión. (La Revista de Derecho: Derecho-Sociedad-Cultura Vol.4, N° (2) (1990), p.29-41 (Universidad Central de Chile. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales: Santiago, Chile).

En definitiva, la valoración y motivación de las sentencias conforma una clara evidencia de la garantía fundamental contemplado en nuestro Texto Político de un proceso racional y justo (artículo 19 N° 3°, inciso 5° de la Constitución Política de la República), pudiendo así aseverarse que el deber de fundamentación cuenta con un reconocimiento constitucional que dimana hacia al plano legal que, en el caso del Código de Procedimiento Penal, bien se refleja, entre otros, en los artículos 500 y 541 N° 9 del mismo cuerpo legal; y es por ello que el mismo destacado procesalista nacional, en el precitado texto, indicaba: *“La declaración del derecho la hacen los jueces en la sentencia, acto integrante del procedimiento ‘racional’ requerido por el Constituyente, racionalidad que impone cierta exigencia que el pueblo ‘siente’ como un bien o un valor: la fundamentación o motivación de la misma”*.

DÉCIMO QUINTO: Que, en este orden de ideas, el Código de Procedimiento Penal, cuando se refiere a los vicios de casación de forma, ya sea del procedimiento o de la sentencia, precisa doce numerales que, para estos efectos, resulta relevante lo que señala el número 9°, el que identifica como yerro de esta clase: *“No haber sido extendida en la forma dispuesta por la ley.”*

Lo dicho precedentemente, debe vincularse, entonces, con los numerales 4 y 5 del artículo 500 del citado cuerpo legal, en que se señala, bajo el encabezado:



“La sentencia definitiva de primera instancia y la segunda que modifique o revoque la de otro tribunal, contendrán:

4° Las consideraciones en cuya virtud se dan por probados o por no probados los hechos atribuidos a los procesados; o los que éstos alegan en su descargo, ya para negar su participación, ya para eximirse de responsabilidad, ya para atenuar ésta;

5° Las razones legales o doctrinales que sirven para calificar el delito y sus circunstancias, tanto las agravantes como las atenuantes, y para establecer la responsabilidad o la irresponsabilidad civil de los procesados o de terceras personas citadas al juicio;”.

En este sentido, en diversos fallos expedidos por esta Corte se ha expresado que, *del contexto del artículo 500 del Código de Procedimiento Penal, en sus números 4 y 5, se desprende que, en las sentencias de que se trata, se deben establecer los hechos sobre que versa la cuestión destinada a fallarse; y, junto con el señalamiento de esos hechos, expresar cuáles se encuentran justificados legalmente, dando los fundamentos que autorizan para considerar verificada la comprobación. La presentación de los hechos en la forma indicada, será la base en la cual se asienten los razonamientos jurídicos o consideraciones de derecho que conduzcan a sancionar al inculpado que aparezca como responsable, o absolver al que sea inocente.*

Insistiendo, por vía de claridad, en la doctrina precedentemente manifestada, cabe decir que no basta que en la sentencia se enuncien los hechos de los cuales se cree derivar un acto delictivo. Tales hechos deben ser examinados y ponderados, dando razones de por qué se estima que constituyen



actos ilícitos. Junto con ese examen y ponderación, se analizarán pormenores y circunstancias que rodearon los hechos, los que servirán para derivar conclusiones sobre la calificación del delito (si éste ha existido), señalando la clase y grado de responsabilidad que corresponda atribuir al inculpado. Así, examinados los hechos y determinada la responsabilidad, se impondrá la sanción penal que proceda aplicando los preceptos legales pertinentes (C. Suprema, 7 marzo 1944, R.C.P., 1944, t. VIII, N° 2, p. 171 / C. Suprema, 24 marzo 1944, R.C.P., 1944, t. VIII, N° 4, p. 356 / C. Suprema, 6 abril 1944, R.C.P., 1944, t. VII, N° 4, p. 360 / C. Suprema, 28 diciembre 1944, G., 1944, 2° Sem., N° 42, p. 181 / C. Suprema, 22 junio 1948, G., 1948, 1° Sem., N° 43, p. 241 / C. Suprema, 12 de diciembre 1951, R., t. 48, sec. 4ª, p. 290 / C. Suprema, 10 agosto 1965, R., t. 62, sec. 4ª, p. 330).

De igual forma, se ha sostenido que: “... lo que la ley sanciona es la falta de considerandos, ya sea que éstos no existan realmente o que, existiendo, aparezcan contradictorios los unos con los otros en términos que se destruyan o que sean incongruentes con la conclusión, pero la extensión que deba darse a los distintos razonamientos que se formulan respecto a la prueba examinada queda entregada al criterio del tribunal hasta formarse la convicción que se propone adquirir.” (C. Suprema, 11 de noviembre de 1964. R. t. 61, sec. 4ª, p. 453).

DÉCIMO SEXTO: Que, en estos antecedentes, se ha dirigido la instrucción a causa de la muerte de Marcos Quezada Yáñez, siendo investigada la responsabilidad que en ella les cabría a José Dolorindo Fernández Cofré, Nelson Adalberto Almendras Illesca, Marco Antonio Aguirre Guajardo, Joel Erwin Pérez Isla, César Octavio Adriazola Azocar, Bernardo Iván Aedo Leiva y José Domingo



Cádiz Parada.

Conforme al mérito del proceso, a fojas 2671 y siguientes, Joel Erwin Pérez Isla, Marco Antonio Aguirre Guajardo, César Octavio Adriazola Azocar, Nelson Adalberto Almendras Illesca y José Dolorindo Fernández Cofré, fueron acusados como autores del delito de homicidio calificado, previsto y sancionado en el artículo 391 N° 1, circunstancia primera, del Código Penal; en tanto que, Bernardo Iván Aedo Leiva y José Domingo Cádiz Parada fueron acusados de ser cómplices del mismo ilícito.

Finalmente, en el fallo de primera instancia, los acusados Almendras Illesca, Pérez Isla y Aguirre son absueltos por falta de participación en los hechos. En cambio, los restantes sentenciados resultaron condenados de los cargos levantados en su contra, en diferentes grados de participación, aplicándoseles penas corporales efectivas, todo lo cual fue ratificado por los sentenciadores de segundo grado, tanto en sus fundamentos como en la decisión.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, en este plano, no existe objeción acerca de la muerte de la víctima, quien fallece en la Quinta Comisaría de Carabineros de Curacautín, en cambio, lo que sí encuentra discusión son las circunstancias que rodearon dicho fallecimiento pues, en la imputación de cargos que conforma el auto acusatorio, se estableció que dicho deceso fue provocado por agentes del Estado, quienes procedieron a ultimar a la víctima de forma tal que ello pareciese un suicidio, de tal manera que la argumentación de esta imputación criminal debió ser dirigida a acreditar la existencia de un homicidio al que, además, se le atribuyó el carácter de calificado por la alevosía que se le endilga a los actores que obraron, según el caso como autores o cómplices del mismo.



Dicho lo anterior, al revisar los laudos criminales, se advierte que el establecimiento de los hechos se ejecuta en el considerando 3° de la sentencia de primera instancia, en donde se imputa la muerte de la víctima a la acción de terceros, en particular a los condenados, ello, principalmente, basado en ciertos informes periciales que se mencionan, los cuales plantearon la existencia de lesiones en las manos provocadas por corriente eléctrica y que habría causado un estado de inconciencia, al igual que una imposibilidad de operar sus extremidades que, unidas, descartarían el suicidio, aspectos que se complementan con los dichos del deponente Juan Maldonado Pacheco, quien, pese a no observar lo anterior, entrega ciertos detalles que concuerdan con las circunstancias enunciadas.

DÉCIMO OCTAVO: Que, de lo dicho, lo primero que resalta es la valoración atribuida a ciertos informes periciales, en particular al de autopsia evacuado por el médico legista, Wolfgang Reuter, al cual se le entrega una calidad preponderante que lo hace primar por sobre los demás (*en el capítulo intitulado “F.- Reflexiones sobre los elementos probatorios”, numeral romano iv), letra b.3, se lee expresamente: “el único informe pericial válido en conformidad al Código de Procedimiento Penal respecto de la autopsia es el del doctor Wolfgang Reuter, es decir no hay dos informes periciales idénticos, con la misma descripción y objetivos respecto de la autopsia...”*), ello pese a que sus conclusiones se contraponen a otros que entregan una posición disímil sobre el deceso de la víctima, los que cuestionan, incluso, la metodología adoptada por el mentado galeno, siendo del todo insuficiente para reafirmar su valor el hecho que haya sido quien haya tenido a la vista el cuerpo del occiso.



En este orden de consideraciones, al resultar evidente la disputa sobre la causa de muerte de la víctima, ello, sin duda, demandaba del fallo un mayor esfuerzo argumentativo para asentar sus conclusiones, no sólo por lo dicho sino porque, principalmente, es la acción de matar a otro lo que conforma el núcleo central de la imputación efectuada a los inculpados que, en este caso, descansa en el contenido de ciertos informes y las declaraciones del testigo Maldonado Pacheco.

En este caso, a lo largo de los considerandos en que se contienen las motivaciones asociadas a la configuración del delito de homicidio calificado, lo cierto es que se advierten contradicciones probatorias que se reflejan una clara deficiencia argumentativa en torno a las dudas que, precisamente, se generan a raíz de la ponderación del insumo probatorio usado para configurar la imputación que los sentenciadores atribuyen a los acusados, en este caso, la ejecución de un crimen que supone dar muerte a la víctima, lo que se realiza con la colaboración de otros que, con su actuar, aportan en dicho accionar, sin embargo, al revisar los laudos penales, en ninguno de ellos existe una real explicación en torno a qué acto ejecuta cada uno como para considerar configurado el acto punitivo central de este caso –matar–, el cual, como se denota y reitera, tan sólo cuenta con la versión de un testigo cuya credibilidad fue puesta en duda a raíz del estado étlico por el que fue detenido y, en lo que respecta a los peritajes en que se apoya, éstos tampoco son definitorios en este aspecto ya que existen otros que se contraponen a las conclusiones técnicas en que se basa la tesis del homicidio, de tal manera que el sustento probatorio y que, según aseguran los *jurisdicentes*, no permite arribar a la convicción legal sobre la comisión del delito pues ella no



cuenta con razones suficientes que justifiquen su configuración.

Por lo demás, un defecto similar se denota al construir la participación atribuida a los acusados, a quienes se les imputó distintos grados de acción que no fueron detallados sino que expresados de forma genérica. En efecto, v. g. de lo anterior es el caso de José Dolorindo Fernández Cofré, en que la sentencia de primera instancia se aboca a sus declaraciones indagatorias a partir del razonamiento 8°, en donde se repasan las versiones planteadas en diferentes momentos en que ha sido requerido. Luego, en el considerando 9°, se mencionan las declaraciones y documentos con los que se construiría la participación, de lo cual concluye que le ha correspondido en calidad de autor en los términos del artículo 15 N°1 del Código Penal, ello sin perjuicio de las reflexiones que anticipa serán realizadas al analizar los escritos de los querellantes y las defensas, por lo cual, mayores fundamentos debieron encontrarse en dichos capítulos que, revisados sólo expresan que *el Tribunal estará a lo antes razonado respecto a las declaraciones indagatorias*, es decir, no existe un mayor análisis en torno a la actividad delictual desplegada por dicho encartado y, en lo que sigue, sobre el “*análisis de las defensas específicas*”, no se enuncian aspectos que denoten un claro razonar en torno a qué actividad ejecutó y que permita su encuadre en lo que señala el numeral 1° del artículo 15 del Código Penal, esto es, *los que toman parte en la ejecución del hecho, sea de una manera inmediata y directa; sea impidiendo o procurando impedir que se evite*. En consecuencia, se advierte una carencia argumentativa asociada a la participación en los hechos, lo cual se replica a todos los encausados, en dónde se usa la misma técnica que sólo descansa en la valoración de elementos probatorios que, como se dijo, denotan



una falta de rigurosidad en aspectos relevantes.

En definitiva, en el fallo de primer grado no existe una comprobación real sobre los aspectos propios de la tipicidad de la figura penal y la participación atribuida a los encartados, deficiencias u omisiones que no fueron corregidas – como debieron serlo– en el fallo de segunda instancia, puesto que éste se limita a concordar con aquél, sin agregar consideraciones propias en este extremo, todo lo cual, incluso, repercute en el establecimiento de los hechos, –conformando un vicio de casación de forma, en particular la causal 9ª del artículo 541 del Código de Enjuiciamiento Criminal, en relación con los numerales 4º y 5º del artículo 500 del mismo cuerpo legal, lo cual obliga a declarar de oficio la nulidad del mentado fallo.

DÉCIMO NOVENO: Que, con arreglo al artículo 775 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en la especie de conformidad con lo preceptuado en el artículo 535 del Código de Procedimiento Penal, este tribunal puede, conociendo por vía de casación, invalidar de oficio la sentencia, cuando los antecedentes del recurso manifiesten que adolece de vicios que dan lugar a la casación en la forma, cuestión que fue posible advertir sólo durante el estado de acuerdo como ya se señaló, al existir un vicio formal conforme se describe en los motivos precedentes, por lo que esta Corte procederá a anular de oficio el fallo de segunda instancia, dictando a continuación la sentencia de reemplazo que se ajuste a Derecho.

Y, de conformidad asimismo con lo que disponen los artículos 535, 546 y 547 del Código de Procedimiento Penal; y, 775 del Código de Procedimiento Civil, se **RESUELVE:**

- I. Que, se **RECHAZAN** los recursos de casación en la forma y en el



fondo, interpuestos en favor de los condenados José Dolorindo Fernández Cofré, César Octavio Adriazola Azocar y José Domingo Cádiz Parada, presentados por su defensa letrada, don Alexander Schnaeder Oyanedel, al igual que, el recurso de casación en la forma y en el fondo, interpuesto en beneficio del sentenciado Bernardo Iván Aedo Leiva, todos enderezados en contra de la sentencia definitiva de fecha veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, pronunciada por una de las salas de la Corte de Apelaciones de Temuco.

II. Que, por los argumentos enunciados en los fundamentos décimo tercero y décimo noveno, se invalidará de oficio la referida sentencia, siendo reemplazada por la que se dicta a continuación, sin nueva vista, pero separadamente.

Se previene que el abogado integrante, señor Ferrada, comparte los fundamentos expuestos en torno a la resolución de los recursos de casación impetrados, sin embargo, a propósito de la actuación de oficio que dispone este tribunal, adhiriendo a las consideraciones duodécimo a décimo noveno, estimó que ellas sólo deben operar respecto de la participación atribuida al sentenciado Aedo Leiva, la cual no se encuentra fundada en términos legales y, en lo que dice relación a la calificación jurídica, en particular respecto de la concurrencia de la alevosía como calificante del ilícito, aspectos en los que el fallo en alzada incurre en el vicio de casación formal del numeral 9° del artículo 541 del Código de Procedimiento Penal, en relación con los numerandos 4 y 5 del del artículo 500 del mismo cuerpo legal, respectivamente.



En consecuencia, en concepto del previniente, el referido encausado debió ser absuelto de los cargos imputados, por carecer de participación criminal en los hechos luctuosos y, en cualquier caso, respecto de todos los demás, estimó necesario recalificar el ilícito a la figura penal del homicidio simple en la persona de Marcos Quezada Yáñez, por no estar acreditados los elementos legales de la alevosía.

Lo anterior, fue acordado con el voto en contra del abogado integrante, señor Gandulfo, quien estimó improcedente la actuación oficiosa por parte de esta Corte, ello en virtud de los siguientes fundamentos:

1º) Que, tal como establece el artículo 775 del Código de Procedimiento Civil, podrá obrarse de oficio e invalidar una sentencia cuando los antecedentes del recurso manifiesten que ella adolece de vicios que den lugar a la casación en la forma.

2º) Que, en este caso, una actuación de oficio como la efectuada, en donde se precisa una infracción formal del fallo, en particular de los numerales 4 y 5 del artículo 500 del Código de Procedimiento Penal, supone una ausencia de consideraciones, o bien que, existiendo, ellas sean contrapuestas, lo cual vuelve ilógica la decisión.

3º) Que, en este orden de cosas, a juicio del disidente, la sentencia que se revisa anota explicaciones suficientes que justifican su resolución, pues ellas se ven respaldadas con el acervo probatorio reunido durante la instrucción, siendo del caso mencionar que el Tribunal del grado se ha hecho cargo con claridad de los hechos que han sido probados y que fueron atribuidos a los sentenciados, al



igual que aquellos aspectos propios de los descargos planteados por sus defensas, lo cual permite validar el fallo en estudio.

Regístrese.

Redacción a cargo de la Ministra señora Letelier, en tanto la disidencia y la prevención de sus autores.

Rol N°252.450-2023.

Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte Suprema, integrada por los Ministros Sr. Manuel Valderrama R., Sras. María Teresa Letelier R., María Cristina Gajardo H., y los Abogados Integrantes Sres. Juan Carlos Ferrada B. y Eduardo Gandulfo R. Santiago, 30 de abril de 2025.

MANUEL ANTONIO VALDERRAMA
REBOLLEDO
MINISTRO
Fecha: 30/04/2025 13:53:07

MARIA TERESA DE JESUS LETELIER
RAMIREZ
MINISTRA
Fecha: 30/04/2025 13:53:07

MARIA CRISTINA GAJARDO HARBOE
MINISTRA
Fecha: 30/04/2025 13:53:08

JUAN CARLO FERRADA BORQUEZ
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 30/04/2025 13:54:09

EDUARDO NELSON GANDULFO
RAMIREZ
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 30/04/2025 13:53:09



En Santiago, a treinta de abril de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo personalmente al Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien no firmó.



Santiago, treinta de abril de dos mil veinticinco.

En cumplimiento a lo ordenado por la decisión precedente y teniendo en consideración, además, lo previsto en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, se dicta el siguiente fallo.

VISTOS:

De la sentencia de primera instancia, fechada catorce de marzo del año dos mil veintitrés, dictada por el Ministro en Visita extraordinaria, don Álvaro Mesa Latorre, en la causa Rol N° 18.779 del Primer Juzgado de Letras de Curacautín, se elimina el “Índice”, el “Resumen ejecutivo” y la referencia a los “Actuarios de Tramitación y Dato Técnico”, al igual que los títulos apuntados como “Ubicación de Doctrina”, “Ubicación de Jurisprudencia” y “Reflexiones de Lesa Humanidad” que se mencionan al inicio del fallo que se revisa.

De la misma sentencia, se reproduce la referencia que sigue al título “I. Relación de la Sentencia:”, la cual pasa a conformar la parte expositiva.

Asimismo, en su parte considerativa, se mantienen las reseñas que siguen a los títulos: “En cuanto a las tachas” y “En cuanto a la acción penal”, suprimiendo de este último, los considerandos 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 10°, 12°, 13°, 15°, 16°, 18°, 19°, 21°, 22°, 24°, 25°, 27°, 28° a 52°.

Finalmente, se elimina lo que sigue al título “IX. En cuanto a la Acción Civil”.

Y, TENIENDO, ADEMÁS, PRESENTE:

1°) Que, con fecha catorce de marzo del año dos mil veintitrés, el Ministro en Visita extraordinaria, don Álvaro Mesa Latorre, en la causa Rol N° 18.779 del Primer Juzgado de Letras de Curacautín, ha dictado sentencia definitiva, en la cual, en plano penal, condenó a José Dolorindo Fernández Cofré, a sufrir la pena de doce años de presidio mayor en su grado medio y



accesorias legales, en calidad de autor del delito de homicidio calificado de Marcos Quezada Yáñez, hecho sucedido el 24 de junio de 1989, en la Comuna de Curacautín; a César Octavio Adriazola Azocar, a cumplir la pena de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio y accesorias legales, en calidad de autor del mismo delito, y; José Domingo Cádiz Parada y Bernardo Iván Aedo Leiva, a purgar la pena de siete años de presidio mayor en su grado medio y accesorias legales, ambos en calidad de cómplices en el ilícito detallado. En todos los casos, se determina su cumplimiento efectivo, reconociéndoseles los abonos a las penas corporales detalladas.

De igual forma, libró una decisión absolutoria respecto de los acusados Nelson Adalberto Almendras Illesca, Joel Erwin Pérez Isla y Marco Antonio Aguirre Guajardo.

En el ámbito civil, junto con rechazar las alegaciones y excepciones interpuestas por el Consejo de Defensa del Estado, acoge la demanda civil interpuesta por el abogado Sebastián Saavedra Cea, en representación de Juan Vicente Yáñez Aedo, Nélida Eliana Yáñez Bustos y Jorge Absalón Quezada Yáñez, de fs. 2.814 a 2.853, en contra del Fisco de Chile, condenándose a la parte demandada a pagar como indemnización de perjuicios por concepto de daño moral a la suma de: a) 150.000.000 (ciento cincuenta millones de pesos) para cada uno de los demandantes civiles, suma reajustada en la forma determinada en el fallo, más el pago de las costas de la causa.

CONSIDERANDO

1º) Que, conforme se observa en el considerando 3º, el referido Ministro en Visita, con la valoración de la prueba reunida, procede a establecer los hechos que fueron objeto de juzgamiento, calificando los mismos como



constitutivos de un delito de homicidio calificado, en su carácter de lesa humanidad, atribuyendo diferentes participaciones delictuales a quienes, en definitiva, condena en lo resolutivo.

2º) Que, en tanto, dicha decisión condenatoria fue objeto de sendos recursos de apelación deducidos por parte de la abogada María Graciela Carrillo Fuentes, en representación del condenado César Adriazola Azocar (fs. 3.971 a fs. 3.991), del abogado Alexander Schneider Oyanadel, en defensa de los sentenciados José Fernández Cofre (fs. 3.994 a fs. 4.004) y José Cádiz Parada (fs. 4.072 a fs. 4.100) y, la apelación verbal formulada por Bernardo Aedo Leiva (fs. 4121).

3º) Que, previo a la resolución de los recursos de apelación, útil resulta resaltar los hechos que el sentenciador estimó acreditados con la prueba vertida en el proceso, los cuales están contenido en el razonamiento indicado:

A.- Que a raíz de una denuncia por robo que afectó al local comercial "Panadería Suiza" en la comuna de Curacautín, el día 24 de junio de 1989, alrededor de las 12:30 horas, fue detenido en la vía pública Marcos Quezada Yáñez, de 17 años de edad, quien era sindicado como el único sospechoso del ilícito, por haber trabajado de manera ocasional en dicho lugar. Su aprehensión fue practicada por cuatro funcionarios de Carabineros de la Comisaría de Curacautín, entre ellos los cabos Joel Pérez Isla y Nelson Almendras Illesca y los carabineros Marcos Aguirre Guajardo y Erwin Hormazábal Aedo. Al momento de la detención, Quezada Yáñez no presentaba lesiones visibles.

B.- Que una vez en la comisaría, Quezada Yáñez fue ingresado a una dependencia destinada al entretenimiento de los funcionarios de la unidad, contigua al cuerpo de guardia. Allí fue interrogado por todos sus aprehensores y el Teniente César Adriazola Azócar, quien, además, dirigía el interrogatorio



del detenido. Luego de que supuestamente Quezada Yáñez se atribuyera participación en el ilícito investigado, fue trasladado fuera del recinto policial hasta el sector del estero Manzanoco, a un terreno privado, cercano a un establecimiento educacional, ya que supuestamente habría tirado algunas especies en dicho lugar. Este traslado estuvo a cargo de los cabos Pérez Isla y Almendras Illesca, además del carabinero Aguirre Guajardo. Posteriormente, fue nuevamente conducido hasta el recinto policial, entregándosele al cuerpo de guardia, siendo interrogado nuevamente, tal como se dirá en la siguiente letra.

C.- Que el mismo día 24 de junio, tres funcionarios de la unidad de carabineros de Manzanar, entre ellos el jefe de ese retén, Sargento José Dolorindo Fernández Cofré, y los carabineros Claudio Contreras Valencia y Erick Vásquez Órdenes, se constituyeron en la Quinta Comisaría de Carabineros de Curacautín, ya que el comisario de dicha unidad les ordenó formar la comisión civil encargada de la fiscalización de alcoholes en la comuna. Durante sus labores, la comisión descrita procedió a la aprehensión de dos personas, entre ellos José Lagos Pulgar y Juan Maldonado Pacheco, quienes fueron conducidos hasta los calabozos de la Quinta Comisaría de Carabineros de Curacautín e ingresados en ellos a las 16:35 y 17:55 horas respectivamente, según da cuenta el propio Libro de Novedades de Guardia ese cuartel. Que Maldonado Pacheco, al cabo de unos minutos luego de haber sido ingresado en esas dependencias, escuchó gritos de dolor de una persona de sexo masculino, oyendo cada vez el ruido característico de paso de electricidad y risas de algunos carabineros, prolongándose esta situación entre dos o tres minutos, aproximadamente. Posteriormente, el detenido escuchó alboroto y paseos de carabineros por frente al calabozo en que se encontraba,



observando el ingreso de funcionarios de carabineros con palos o vigas y luego una persona joven sobre un carrito o camilla, trasladado por personal de carabineros, entre ellos el sargento José Dolorindo Fernández Cofré, que esa noche se encontraba integrando la comisión civil de alcoholes en esa localidad.

D.- Que alrededor de las 19:20 horas, del mismo día 24 de junio de 1989, familiares de Quezada Yáñez concurren hasta la unidad de Carabineros a fin de consultar por su estado y dejarle alimentos. Sin embargo, el cabo José Cádiz Parada, que en esos momentos estaba de servicio de guardia, les manifestó que regresaran más tarde, no informándoles que en el momento de revisar el calabozo en que se hallaba Marcos Quezada, el carabinero Bernardo Aedo Leiva lo encontró colgado con una chomba desde una de las vigas.

E.- Que acontecido lo anterior, el cabo Cádiz Parada comunicó la situación de Quezada Yáñez a sus superiores, entre ellos al Teniente César Adriazola Azócar, quienes concurren al lugar y observaron que la persona de Quezada Yáñez pendía sin vida desde una de las vigas del calabozo.

F.- Que el cadáver de Quezada Yáñez fue remitido al médico legista Wolfgang Reuter Berger, junto con el parte policial que indicaba que al parecer Quezada Yáñez habría fallecido por ahorcamiento. El profesional determinó que la causa precisa y necesaria de la muerte de Marcos Quezada Yáñez era atribuida a "shock determinado muy probablemente por acción de corriente eléctrica aplicado en algunos dedos de ambas manos". Lo precedente es corroborado, además, por el informe del Departamento de Medicina Criminalística de la Policía de Investigaciones de Chile, a fs. 758, el cual concluye que Quezada, previo a su ahorcamiento, fue expuesto por terceros a electricidad en ambas manos y que probablemente posterior a dicha



exposición se encontraba incapacitado para efectuar maniobras conducentes a su ahorcamiento, lo que es coherente con el ingreso de Quezada Yáñez a esa repartición, sin lesiones visibles y la declaración del principal testigo, Juan Maldonado Pacheco y el informe del Servicio Médico Legal de fs. 1.599 y siguientes. Del mismo modo el informe del mismo servicio de fs. 2.596 donde sugiere que puede ser ahorcamiento, pero no desmiente que hubo acción de corriente eléctrica, no pudiendo desvirtuar los dichos del testigo Juan Maldonado Pacheco.-

G.- Que por lo anterior, la persona de Marcos Quezada Yáñez, una vez detenido y llevado al cuartel policial fue objeto de apremios con uso de electricidad, en este caso en ambas manos, lo que le causó un desmayo o falta de conciencia. En tales circunstancias no hacía posible que Quezada Yáñez, por su estado de salud, por las condiciones en que estaba en el calabozo, ubicación de la viga y utilización de la prenda que sirvió de vínculo, se hubiera ahorcado, tal como se ha dicho en la letra anterior. Muerte que finalmente no permite descartar la participación de terceros, según el propio informe del Servicio Médico Legal de fs. 1.599 y siguientes y el de fs. 2.596. De todo esto tomó conocimiento tanto el personal de guardia, interrogador y quienes se encontraban de servicio de guardia el día de los hechos. Además, en ninguna pieza del expediente militar de la época que se tiene a la vista, se deja constancia que al momento del ingreso a la unidad policial, Marcos Quezada Yáñez haya tenido lesiones visibles en alguna parte del cuerpo, lo que es coincidente con el informe de la Sección de Asuntos Internos Provincial Malleco de Carabineros de Chile, que rola a fs. 103 y siguientes.

Finalmente, en relación al principal testigo del proceso, Juan Nolberto Maldonado Pacheco, es el propio informe psiquiátrico del Servicio Médico



Legal de Temuco, de fs. 2.046 y siguientes, el que concluye que es una persona normal sin alteración de juicio de realidad, lo que además se ve corroborado por mantener un relato coherente y similar cada vez que ha comparecido en el proceso.”

4º) Que, siendo un tópico común planteado por los impugnantes, conforme se desprende del sustrato fáctico previamente detallado, el sentenciador de primer grado considera acreditada la aplicación de apremios físicos por parte de los celadores de la víctima, lo cual le provocó un estado de inconciencia que fue aprovechado por aquellos, quienes procedieron a colgarlo del cuello a una viga ubicada en una de las celdas, simulando un suicidio que, en criterio del juzgador, resulta descartado por informes periciales aportados y, en particular, conforme a los dichos del testigo, Juan Maldonado Pacheco, quien en esos momentos también se encontraba privado de libertad en el recinto policial de la comuna de la Comisaría de Curacautín.

5º) Que, para los efectos de sustentar los hechos, o dicho de otro modo, para estimar acreditada la acción de matar a la víctima, incluso la aplicación de tormentos, cobraron suma relevancia ciertos informes periciales que establecieron la existencia de lesiones en los dedos de la víctima, las que fueron provocadas por descargas de energía eléctrica, lo cual se contrapone a la documentación de la unidad policial, en donde se deja establecido que aquél ingresa sin lesiones al recinto, sumado a la conclusión de la autopsia de la época, la que fija como *“causa precisa y necesaria de la muerte de Marcos Quezada Yáñez, fue el shock determinado muy probablemente por acción de corriente eléctrica aplicada en algunos dedos de ambas manos”*.; todo lo cual, sin embargo, se contrapone a otros informes técnicos que establecen distintas hipótesis respecto de lo sucedido, en especial sobre la muerte del afectado.



6º) Que, a propósito del tema, en este aspecto, no puede perderse de vista los objetivos y/o líneas investigativas asociadas a un caso como el que se viene analizando, las cuales están contenidas en los artículos 135 y 136 del Código de Procedimiento Penal, permitiendo entender que, a diferencia de lo que se plantea en primera instancia, no es efectivo que el único informe pericial válido y más autorizado, corresponde a la autopsia realizada en aquella época pues, aun cuando haya sido el médico legista que la evacúa y quien ha sido el único que tuvo a la vista el cuerpo del occiso, lo cierto es que éste no abarca los aspectos necesarios para estimarlo conclusivo e, incluso, en el proceso rolan otros informes que indagan sobre los mismos aspectos técnicos y científicos, la causa de muerte de la víctima, de tal manera este elemento es una situación debatible y controvertida, con lo cual cobra aplicación el artículo 472 del Código de Procedimiento Penal, pues no existe una preferencia por la autopsia que le dé preeminencia por sobre otro ya que, de otra forma, el legislador le habría otorgado el carácter de plena prueba a la autopsia y, aun cuando aquella no sea una norma regulatoria de la prueba, lo cierto es que no hay dos dictámenes concluyentes acerca de la causa de muerte del afectado, no pudiendo así establecerse las circunstancias de aquel hecho y, por lo demás, si para ello se recurre al artículo 473 del mismo cuerpo legal, la fuerza probatoria que debe atribuírsele a un informe de esta clase, radica en que debe ser sopesado por la competencia de los peritos, la uniformidad o disconformidad de sus opiniones, los principios científicos en que se apoyen, la concordancia de su aplicación con las leyes de la sana lógica y las demás pruebas y elementos de convicción que ofrezca el proceso, lo cual se engloba en un razonamiento que aborde todos los elementos anotados que, en este caso, no se advierte.



7º) Que, en este orden de consideraciones, ante hipótesis periciales contradictorias, si el sentenciador pretende optar por una de ellas, sin duda debe explicar los motivos y entregar las razones para ello pues en eso consiste la construcción del juicio jurisdiccional en el proceso que, en este caso, no se vislumbra ya que el ejercicio de subsunción o calificación jurídica de los hechos se encuentra tratado en el razonamiento 4º del laudo inicial, al cual le precede una descripción factual que la concluye como de un homicidio calificado en la persona de la víctima, sin ahondar más allá pues, incluso, cuando se pronuncia sobre las alegaciones de las defensas, tan solo se remite a reflexiones ausentes, lo cual se traduce en una insuficiencia argumentativa y de razonamientos en torno al principal hecho atribuidos a los procesados.

8º) Que, algo similar se puede decir sobre la valoración que se le otorga a la declaración del testigo Juan Nolberto Maldonado Pacheco, quien, a juicio del sentenciador, complementa y explica gran parte de lo sucedido el día de los hechos, entregando detalles que develarían la forma en que se habría procedido con la víctima en la unidad policial. No obstante, nuevamente, se constata una infracción sobre los argumentos que explican dicha preferencia, máxime si se toma en consideración la condición ética que el mismo reconoce pues, tal como se encuentra asentado, fue detenido por encontrarse en estado de ebriedad, elemento que vuelve, a lo menos dudoso, la claridad con que pudo percibir lo que ocurrió aquel día. Incluso, sin una sólida justificación, no puede obviarse esa condición que el mismo legislador califica como parte de una inhabilidad para declarar, siendo insuficiente la circunstancia que su declaración no haya sido objeto de tacha ya que, además, dicho testigo ha sido el único que se refiere a los detalles de lo que habría sucedido, por lo que no se congregan las condiciones prescritas en el artículo 459 del Código de



Procedimiento Penal y, por lo dicho, resulta cuestionable la exacerbada valoración sobre lo aseverado por el deponente, lo que tampoco se consolida con el informe de facultades mentales que rola a fojas 2046, el cual comunica aspectos propios de lo que establece el artículo 348 del Código respectivo, mas no sobre la veracidad del relato, el que debe ser ponderado por el sentenciador, con lo cual se concluye la seria impropiedad que se viene señalando al momento de determinar con claridad el núcleo medular del tipo penal que se le atribuye a los encartados.

9°) Que, conforme a reflexiones expuestas, las probanzas no son idóneas para librar una decisión condenatoria respecto de los inculpados como responsables del homicidio calificado por el cual se le formularon cargos, toda vez que no aparece comprobada que, en la muerte de la víctima, hayan participado terceros, en particular los acusados en este proceso.

10°) Que, no encontrándose demostrado que en la especie concurren los componentes típicos de un delito de homicidio calificado, y con arreglo a lo prevenido en el artículo 456 bis del Código de Procedimiento Penal, procede dictar sentencia absolutoria a favor de los encartados ya que nadie puede ser condenado por delito, sino cuando el tribunal que lo juzgue haya adquirido, por los medios de prueba legal, la convicción que realmente se ha cometido un hecho punible y que en él ha correspondido al procesado una participación culpable y penada por la ley.

11°) Que, conforme a lo dicho, se acogerán las solicitudes de absolución de parte de las asistencias letradas de los encausados, en cuanto a absolverlos de los cargos que le fueran librados, omitiendo pronunciarse, por innecesario, acerca de las restantes peticiones.

12°) Que, por lo razonado y por no hallarse acreditada la existencia del



delito materia de la acusación de autos, la demanda civil interpuesta y cuyo fundamento subyace en la existencia del ilícito, debe ser desechada, dado que al tenor del artículo 2314 del Código Civil, la acción intentada aparece desprovista de asidero.

13°) Que, de esta forma, esta Corte comparte lo dictaminado por el Ministerio Público Judicial, en cuanto estuvo por revocar la decisión en alzada.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 514, 527 y 534 del Código de Procedimiento Penal, se **REVOCA** la sentencia apelada, dictada con fecha catorce de marzo de dos mil veintitrés, por el Ministro en Visita extraordinaria, don Álvaro Mesa Latorre, en la causa Rol N° 18.779 del Primer Juzgado de Letras de Curacautín y, en su lugar, se declara que, se **ABSUELVE** a Nelson Adalberto Almendras Illesca, Joel Erwin Pérez Isla, Marco Antonio Aguirre Guajardo, José Dolorindo Fernández Cofré, César Octavio Adriazola Azocar, Bernardo Iván Aedo Leiva y José Domingo Cádiz Parada, de los cargos librados en su contra por la acusación fiscal y su adhesión, por su participación en la muerte de Marcos Quezada Yáñez, suscitada el 24 de junio de 1989, en la comuna de Curacautín; y, asimismo, se **RECHAZA**, la demanda civil interpuesta por el abogado Sebastián Saavedra Cea, en representación de Juan Vicente Yáñez Aedo, Nélida Eliana Yáñez Bustos y Jorge Absalón Quezada Yáñez, de fs. 2.814 a 2.853, en contra del Fisco de Chile, sin costas, por estimarse que la demandante ha tenido motivos plausibles para deducirla.

Se previene que el abogado integrante, señor Ferrada, estuvo por revocar el fallo en alzada, únicamente, en dos aspectos, la participación criminal atribuida a Bernardo Iván Aedo Leiva y lo que dice relación a la



configuración de la calificante, todo lo cual funda en las siguientes consideraciones:

1º) Que, en torno a la calificación jurídica, en particular sobre la alevosía, el ministro instructor razona sobre aquello e indica que, *“funcionarios de Carabineros detuvieron a la víctima Marcos Quezada Yáñez, lo trasladaron hasta la Comisaría de Curacautín para luego causarle la muerte. En consecuencia, si no se hubieran reunido estas condiciones que es obrar sobreseguro y atendido además el contexto de la época, claramente no se hubiera atentado contra la vida de Marcos Quezada Yáñez.”*

2º) Que, sobre el particular, como explica el autor don Mario Garrido Montt (también citado en el fallo que se revisa), *“en el Código Penal nacional no se define lo que es premeditación; pero los criterios enunciados son aplicables al caso y constituyen, a nuestro juicio, integrantes claves de la calificante en análisis. La conjunción del sistema psicológico – tomado en el sentido de parsimonia para reflexionar sobre la comisión ya decidida del hecho, y no en el sentido de frialdad de espíritu del delincuente – y el cronológico, o sea el de acompañar a esa parsimonia reflexiva la persistencia subjetiva del propósito homicida, pueden servir para resolver en nuestra legislación las situaciones que se presenten.”* (Garrido Montt, Mario. *El Homicidio y sus figuras penales*. Ed. 1976. Ediciones Encina. Pg. 149).

Conforme a lo indicado en el fallo, en la especie, se configuró la modalidad de obrar sobre seguro, lo cual, según explica el mismo texto, *“importa crear o aprovechar condiciones fácticas que permiten al agente evitar todo riesgo de su*

3º) Que, en este sentido, tal como se detalla en el considerando 1º de esta disidencia, existiría una suerte de aprovechamiento de parte de los



hechores, aseverando que el delito no se habría ejecutado si es que la víctima no hubiese estado detenida en la unidad policial. Sin embargo, ese carácter de indefensión, que en este caso corresponde a la detención policial y su posterior traslado a la Comisaría, no forma parte de un accionar que haya sido buscado por los ejecutores, sino que ello conforma un aspecto inherente a las circunstancias propias del ilícito cometido, el cual se ejecuta en una unidad policial, a causa de una detención previa que fue motivada por una denuncia criminal respecto del afectado, de lo cual se sigue que, en la especie, en concepto del discordante, no se dan los presupuestos legales para estimar concurrente el delito de homicidio calificado, debiendo los hechos, por tanto, ser recalificados a la figura penal base del homicidio simple.

4°) Que, en cuanto a la participación que se le atribuye al imputado Bernardo Iván Aedo Leiva, la sentencia en alzada menciona su versión sobre los hechos y, luego, detalla los elementos de cargo que pesan en su contra, los que entiende como suficientes para atribuirle una participación en calidad de cómplice en el delito respectivo.

5°) Que, sin embargo, al revisar las conclusiones arribadas, en ninguna de ellas se observa con claridad cuál sería el o los actos que pueden catalogarse de una cooperación en el hecho delictivo investigado y, sobre lo mismo, aun cuando se estimare concurrente el acto de complicidad, lo cierto es que debe estar presente también el deseo o intención y conocimiento que dichos actos apunten a esa cooperación delictiva, lo que debe responder a un momento anterior o simultáneo con los actos ejecutivos del o los autores.

6°) Que, todo lo anterior, a juicio de este previniente, no consta en el proceso, y ninguno de los elementos de cargo permiten revelar de forma unívoca tal intención de parte del sentenciado. De tal manera que, a su



respecto, estimó necesaria la absolución de la imputación criminal atribuida en el auto acusatorio y la respectiva adhesión.

Decisión adoptada con el voto del abogado integrante, señor Gandulfo, quien estuvo por confirmar el fallo en alzada, tanto en el aspecto penal como en el plano civil, haciendo suyo las reflexiones séptima a décimo séptima del fallo anulado, las cuales estima suficientes para desestimar los arbitrios de impugnación presentados por las defensas y por el enjuiciado Aedo, éste último en forma verbal.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Redacción a cargo de la Ministra señora Letelier, en tanto la disidencia y la prevención de sus autores.

Rol N°252.450-2023.

Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte Suprema, integrada por los Ministros Sr. Manuel Valderrama R., Sras. María Teresa Letelier R., María Cristina Gajardo H., y los Abogados Integrantes Sres. Juan Carlos Ferrada B. y Eduardo Gandulfo R. Se deja constancia que la sentencia de reemplazo no es suscrita digitalmente por el Abogado Integrante Sr. Ferrada por un problema computacional. Santiago, 30 de abril de 2025.

MANUEL ANTONIO VALDERRAMA
REBOLLEDO
MINISTRO
Fecha: 30/04/2025 20:34:22

MARIA TERESA DE JESUS LETELIER
RAMIREZ
MINISTRA
Fecha: 30/04/2025 20:34:23

MARIA CRISTINA GAJARDO HARBOE
MINISTRA
Fecha: 30/04/2025 20:34:24

EDUARDO NELSON GANDULFO
RAMIREZ
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 30/04/2025 20:34:25



En Santiago, a treinta de abril de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo personalmente al Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien no firmó.

